

REPUBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLIN



SALA LABORAL
Acta N°052

Medellín, treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

En la fecha, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Segunda de Decisión Laboral, se reunió para emitir sentencia de segunda instancia en la que se resuelve el grado jurisdiccional de consulta, en el proceso ordinario laboral promovido por la señora **CLAUDIA IVON LOPEZ ECHAVARRIA** contra **PROTECCIÓN S.A.** y **COLPENSIONES**.

De acuerdo a lo dispuesto en el numeral segundo del artículo 15 de la Ley 2213 de 2022, la presente decisión se profiere de forma escrita.

ANTECEDENTES

Pretensiones

La demandante solicita que se deje sin efecto su vinculación al RAIS; y, en consecuencia, se declare que se mantuvo afiliada sin solución de continuidad al RPM administrado en la actualidad por **Colpensiones**.

Se condene a **Protección S.A.** a trasladar a **Colpensiones** los aportes y rendimientos recibidos con motivo de su vinculación.

Hechos

Como fundamento de sus pretensiones indica que fue afiliada al **ISS** hoy **Colpensiones** antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 cotizando a esta administradora un total de 481 semanas.

En el mes de mayo de 1995, la actora se trasladó al RAIS administrado por **Protección S.A.**, sin que se le explicara antes de su vinculación las características, ventajas y desventajas de los regímenes pensionales existentes.

Respuesta Colpensiones

Colpensiones a través de apoderado manifestó que es cierto que la demandante fue su afiliada y se trasladó al RAIS, sin que le consten los demás hechos. Se opuso a la prosperidad de las pretensiones y propuso como excepciones: inexistencia de ineficacia en el traslado de régimen, inoponibilidad, buena de fe, prescripción, compensación e imposibilidad de condena en costas.

Respuesta Protección S.A.

Protección S.A. a través de apoderada manifestó que es cierto que la demandante suscribió formulario de vinculación a esa administradora en el año 1998, afiliación que se realizó con el cumplimiento de los parámetros legales de información exigidos para ese momento.

Se opuso a la prosperidad de las pretensiones y propuso como excepciones: inexistencia de la obligación y falta de causa para pedir, buena fe, prescripción, aprovechamiento indebido de recursos públicos, reconocimiento de restitución mutua e inexistencia de la obligación de devolver la prima del seguro previsional.

Sentencia de primera instancia

El Juez Veinte Laboral del Circuito de Medellín, en sentencia **30 de enero de 2023, declaró** la ineficacia del traslado al RAIS, condenando a **Protección S.A.** a que dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que quede en firme la sentencia de primera instancia, traslade con destino a **Colpensiones** todas las cotizaciones, fondos pensionales, sumas adicionales de aseguramiento, frutos intereses, rendimientos causados por el traslado que realizó la señora Claudia Ivón López Echavarría, desde el momento que realizó la afiliación al RAIS hasta el momento que sea reintegrada al RPMPD.

De otro lado, ordenó a **Colpensiones** a recibir la totalidad de los aportes remitidos por la AFP privada y reactivar la afiliación, convalidando dichos aportes en semanas que se vean reflejadas en la historia laboral.

Esta decisión no fue apelada por las partes por lo que al ser desfavorable a los intereses de **Colpensiones** fue remitida al inmediato superior para que la conociera en el grado jurisdiccional de consulta.

Alegatos de conclusión

Corrido el término de traslado, la apoderada de **Colpensiones** solicitó que se revoque la decisión de primera instancia, toda vez que esa entidad no debe asumir las consecuencias de la conducta de **Protección S.A.**, pasándose por alto además que el traslado de una persona que se encuentra dentro de la prohibición legal para hacer uso del derecho de elección de régimen pensional desconoce el principio de sostenibilidad financiera del sistema de pensiones.

En caso de que se confirme la decisión de primera instancia solicitó que se ordene a **Protección S.A.** trasladar todas las sumas recibidas con motivo de la afiliación de la actora debidamente indexados.

CONSIDERACIONES

Problema jurídico

Los problemas jurídicos a resolver en esta segunda instancia conforme con el grado jurisdiccional de consulta, serán: (i) Determinar si el acto jurídico que generó el traslado de régimen del demandante resulta o no eficaz, (ii) Determinar cuáles son las consecuencias jurídicas de la declaratoria de ineficacia y (iii) revisar si operó la prescripción.

Pruebas relevantes

Antes de resolver considera la Sala importante realizar las siguientes precisiones de conformidad con las pruebas que obran en el expediente:

1. La señora **Claudia Ivón López Echavarría** fue afiliada al **ISS** hoy **Colpensiones** el día **18 de noviembre de 1985** (02/pág.23).
2. La actora suscribió formulario de traslado al RAIS administrado por **Protección S.A.** el día **24 de mayo de 1995** (02/pág.26), afiliación vigente desde 1 de junio de 1995 (12/pág.47).

Efectuadas las anteriores precisiones procederá la Sala a resolver los problemas jurídicos puestos en su conocimiento:

El precedente jurisprudencial en materia de traslado de régimen pensional

La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha elaborado un nutrido precedente en materia de la obligación de información de los fondos de pensiones, siendo sus sentencias fundantes la 31314 y 31989 del 9 de septiembre de 2008, a las que ha seguido una copiosa producción al resolver recursos de casación en las sentencias SL-1688-2019, SL-4360-2019, SL-4426 de 2019, SL-2611 de 2020, SL-1217 de 2021 y SL-1022-2022.

En las providencias citadas el Alto Tribunal fijó unos grados de exigencia de la información, dependiendo de las normas vigentes para la fecha en que se efectúe el vínculo a las administradoras de pensiones, estableciendo en lo temporal los siguientes momentos: (i) desde la fundación de las AFP, segundo momento, (ii) desde la expedición de la Ley 1328 de 2009 y el Decreto 2241 de 2010 y (iii) a partir de la vigencia de la Ley 1748 de 2014 y el Decreto 2071 de 2015.

En el caso sometido a estudio, el traslado al RAIS se realizó a través de **Protección S.A.** el día **24 de mayo de 1995** (02/pág.26), lo que se corresponde con el primer momento, ciclo para el cual la jurisprudencia en interpretación del artículo 97 del Decreto 663 de 1993 ha exigido la demostración por parte de las administradoras de pensiones del cumplimiento del deber entregar una información necesaria y transparente, conceptos que se explican en la sentencia SL-1452-2019 de la siguiente forma:

Información necesaria: consistente en la descripción de las características, condiciones, acceso y servicios de cada uno de los regímenes pensionales, de modo que el afiliado pueda conocer con exactitud la lógica de los sistemas públicos y privados de pensiones, lo que implica un comparativo entre las vigentes, así como de las consecuencias jurídicas del traslado.

Transparencia: La AFP a través de su promotor debe comunicar a su potencial afiliado en un lenguaje claro, simple y comprensible, los elementos definitorios y condiciones del régimen de ahorro individual con solidaridad y del de prima media con prestación definida, de manera que la elección pueda realizarse por el afiliado después de comprender a plenitud las reglas, consecuencias y riesgos de cada uno de los oferentes de servicios.

El anterior deber trae en lo procesal una carga que recae en la administradora de pensiones, y es demostrar que suministró al posible afiliado una información calificada, en la que se expliquen los beneficios y desventajas del cambio de régimen, para solo a partir de este conocimiento concluir que se garantizó su derecho al ejercicio de una libre selección de régimen pensional.

Sobre la **carga de la prueba** es importante la remisión a la sentencia SL4426-2019, donde la Corte expone los motivos por los cuales las administradoras deben demostrar que suministraron una información clara y transparente, lo que se explica desde la premisa que el afiliado presenta una afirmación indeterminada -la de que no recibió información- y es el fondo a quien corresponde demostrar que cumplió con sus deberes en esa materia, aspecto en el que por demás está en una mejor posición de ilustrar por cuanto debe conservar en sus archivos la documentación que soporta el traslado.

En lo que respecta al caso de autos, **Protección S.A.** sostuvo al contestar la demanda, que, al momento de captar a la demandante como su afiliada le suministró la información que era exigible para esa fecha, sin embargo, más allá de esta afirmación no se trajo al proceso prueba de que se entregó al demandante una información necesaria y transparente para la fecha de la suscripción del formulario de afiliación¹, debiendo recordarse que la suscripción de este documento apenas implica que hubo un consentimiento libre de vicios² pero no informado.

Sobre las obligaciones que recaen en las administradoras de pensiones es bastante ilustrativa la sentencia SL-782 de 2021, donde la Corte Suprema de Justicia indicó que según su línea jurisprudencial se debe declarar la ineficacia cuando quiera que:

...i) la insuficiencia de la información genere lesiones injustificadas en el derecho pensional del afiliado, impidiéndole su acceso al derecho; ii) no será suficiente la simple suscripción del formulario, sino el cotejo con la información brindada, la cual debe corresponder a la realidad; iii) en los términos del artículo 1604 del Código Civil, corresponde a las

¹En lo referente a la aplicación de la carga de la prueba se indicó en sentencia SL-081-2021, lo siguiente: “Por tal razón, si la parte actora alude a la ausencia de tal información, como ocurre en este caso, no es de su cargo demostrar tal omisión, pues corresponde a un hecho negativo. Por el contrario, es deber de la AFP traer a juicio los elementos de prueba que permitan establecer que, al momento de la afiliación, brindó las explicaciones suficientes y veraces sobre las consecuencias, beneficios y desventajas del traslado de régimen pensional. Así, si a la administradora se le adjudica el incumplimiento de su deber profesional y de no actuar con diligencia, entonces incumbe a ésta acreditar que sí atendió tales obligaciones. Además, es la entidad quien se encuentra en mejor posición probatoria para allegar los elementos de prueba requeridos para esclarecer hechos como los que aquí se discuten.”

² Sentencias SL-4426-2019, SL-782 de 2021 y SL-1743 de 2021.

Administradoras de Fondo de Pensiones allegar prueba sobre los datos proporcionados a los afiliados, los cuales, de no ser ciertos, tendrán además las sanciones pecuniarias del artículo 271 de Ley 100 de 1993, y en los que debe constar los aspectos positivos y negativos de la vinculación y la incidencia en el derecho pensional.

A partir de lo expuesto, encuentra la Sala que al no demostrar **Protección S.A.** que cumpliera con su deber de informar, la consecuencia es que la afiliación efectuada al RAIS a través de ese fondo devenga ineficaz de conformidad con lo establecido en el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, por lo que en este aspecto se **confirmará** el fallo consultado.

De los efectos de la ineficacia

El Juez de primera instancia ordenó a **Protección S.A.** trasladar a **Colpensiones**, todas las cotizaciones, fondos pensionales, sumas adicionales de aseguramiento, frutos intereses, rendimientos causados por el traslado.

Esta decisión no fue debatida por los apoderados de las partes, por lo que se asume su conocimiento en virtud del grado jurisdiccional de consulta en favor a **Colpensiones**, siendo relevante recordar que al aplicarse la ineficacia como respuesta jurídica del ordenamiento jurídico por la transgresión de un deber legal, su implicación es que el acto jurídico declarado ineficaz carezca de vida jurídica, y, por tanto, no produzca ningún efecto.

En ese orden, es importante hacer énfasis en lo enseñado por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la Sentencia SL-4360 de 2019, en la que indicó que: la sanción impuesta en el artículo 271 de la Ley 100 de 1993 consagra una ineficacia en sentido estricto, lo que conlleva que la consecuencia allí contenida es la exclusión de todo efecto al traslado.

Siguiendo esta enseñanza la jurisprudencia ha indicado que debe darse aplicación al artículo 1746 del Código Civil que gobierna las restituciones mutuas en el régimen de nulidades, con la necesaria precisión de que al tratarse de un tema pensional, el juez del trabajo debe aplicar soluciones que compensen de manera satisfactoria el perjuicio que fue ocasionado a un afiliado por el cambio injusto de régimen pensional y ello implica que las AFP que se beneficiaron de ello trasladen a **Colpensiones**, todos los conceptos que recibieron.

En virtud de lo expuesto para la Sala es claro que durante el periodo en que el actor estuvo vinculado al RAIS, se privó a **Colpensiones** del cobro de los

gastos de administración en su favor, y en ese orden el restablecimiento de las cosas a su estado inicial no puede perjudicar al fondo de naturaleza pública, por lo que precisamente con fundamento en el artículo 20 de la Ley 100 de 1993, esta entidad tiene derecho a recibir 3 puntos porcentuales del aporte por gastos de administración, concepto que no fue recibido como consecuencia del acto declarado ineficaz.

Ahora debe recordarse que la vuelta al estado inicial según lo explicado por la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, implica la devolución de los siguientes conceptos recibidos por las AFP del RAIS:

1. **Capital ahorrado:** Este concepto constituye el sustento financiero del pago de la prestación y conforme con lo dispuesto en el literal b) del artículo 113 de la Ley 100 de 1993 debe ser trasladado cuando exista movilidad del RAIS al RPM³.
2. **Rendimientos:** En igual sentido que el concepto anterior, soportan el pago de la pensión y se trasladan conforme a lo enseñado por el canon 113 ídem, destacando con respecto a estos como lo enseñara la Corte desde la sentencia 31989 de 2008, que su devolución se sustenta en que el mayor valor de la cosa aprovecha al vendedor cuando la restitución se debe al incumplimiento del comprador⁴.
3. Los **gastos de administración**⁵, concepto consagra en el artículo 20 de la Ley 100 de 1993 y cuyo valor corresponde a 3 puntos de la cotización obrero patronal efectuada, la cual se destina al pago de seguros previsionales, primas de seguros del Fogafín y la comisión correspondiente a la AFP por su gestión.

En lo referente al traslado de estos conceptos por parte de las administradoras del RAIS a las administradoras del RPM, la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha encontrado 2 razones fundamentales para soportar esta orden: (i) la declaración de ineficacia implica que las administradoras del RAIS nunca debieron recibir estos beneficios⁶, (ii) la devolución debe ser

³Se debe realizar su devolución conforme lo enseñado en las sentencias CSJ SL 31989, 9 sep. 2008, CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018, CSJ SL1421-2019, CSJ SL1688-2019, CSJ SL1689-2019 y CSJ SL4360-2019, CSJ SL-2877-2020, CSJ SL-1442-2021, CSJ SL-1440-2021 y SL-782-2021.

⁴Se debe realizar su devolución conforme lo enseñado en las sentencias CSJ SL 31989, 9 sep. 2008, CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018, CSJ SL1421-2019, CSJ SL1688-2019, CSJ SL1689-2019 y CSJ SL4360-2019, CSJ SL-2877-2020, CSJ SL-1442-2021, CSJ SL-1440-2021 y SL-782-2021.

⁵Se deben asumir por el fondo de pensiones con cargo en su propio patrimonio y de forma indexada. En este sentido se pueden leer las sentencias CSJ SL1688-2019, CSJ SL1689-2019, CSJ SL 782-2021, CSJ SL 1187-2021 y CSJ SL 1197-2021.

⁶Sentencia SL-4360-2019.

plena y con efectos retroactivos, porque estos recursos serán utilizados para la financiación de una pensión, aspecto que busca mantener el principio de sostenibilidad financiera del sistema de pensiones⁷.

4. **Los aportes al fondo de garantía de pensión mínima:** el pago de estos aportes propio del RAIS y consagrado en el artículo 20 de la Ley 100 de 1993 no encuentra un equivalente en el RPM, motivo por el cual esta Sala ha sostenido que al declararse la ineficacia los dineros aportados por el afiliado a este fondo deben ser devueltos al RPM bajo los lineamientos del artículo 7 del Decreto 3995 de 2008 compilado en el DUR 1833 de 2016⁸.

A partir de lo explicado y una vez escuchada la parte motiva de la decisión de primera instancia encuentra la Sala que le asistió razón al juez de primera instancia con respecto a los conceptos que deberán ser trasladados por **Protección S.A. a Colpensiones**, sin embargo, al advertir que los mismos no fueron recogidos de forma clara en la parte resolutive es necesario **adicionar** la decisión consultada, indicando que la orden contenida en el numeral segundo de la decisión de primera instancia, quedará de la siguiente forma:

CONDENAR a PROTECCIÓN S.A., que, en el término un mes contado a partir de la ejecutoria de la sentencia traslade a **COLPENSIONES** los siguientes conceptos: (i) El capital ahorrado en la cuenta individual de la señora **CLAUDIA IVON LOPEZ ECHAVARRIA**, (ii) los rendimientos generados, (iii) los gastos de administración cobrados, sin lugar a descontar valores por concepto de prima de reaseguros de Fogafín, y las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes, dineros que deberán ser indexados al momento de su traslado y asumidos con cargo a su propio patrimonio; y (iv) el aporte correspondiente al fondo de la garantía de pensión mínima.

Antes de finalizar se **adicionará** la decisión de primera instancia, para **ordenar** a **Protección S.A.**, que, al momento de cumplir con la orden de traslado, los conceptos deberán aparecer discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen.

⁷Sentencia SL-2877-2020.

⁸En este sentido se pueden leer las sentencias CSJ SL 2877-2020, CSJ SL-936-2021, CSJ SL-938-2021, CSJ SL-1410-2021CSJ y SL1442-2021.

De la excepción de prescripción

En lo que tiene que ver con la prescripción, encuentra la Sala que esta excepción no está llamada a prosperar, puesto que, la ineficacia es el resultado del incumplimiento de un elemento estructural del negocio, por lo que, al no haber producido efectos, el solo transcurso del tiempo no tiene la virtualidad de integrar los elementos omitidos. En este sentido se remite a la lectura de las sentencias SL-1688-2019, SL-3202-2021 y SL-3199-2021.

Costas

Sin costas en esta instancia.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia, dictada por la Juez Veinte Laboral del Circuito de Medellín, el día **30 de enero de 2023**, en el proceso ordinario laboral de primera instancia adelantado por el señor **CLAUDIA IVON LOPEZ ECHAVARRIA** contra **PROTECCIÓN S.A. y COLPENSIONES**.

SEGUNDO: ADICIONAR la decisión de primera instancia en las condiciones indicadas en la parte motiva de esta providencia, por lo que el numeral segundo de la decisión de primera instancia quedará de la siguiente forma:

CONDENAR a **PROTECCIÓN S.A.**, que, en el término un mes contado a partir de la ejecutoria de la sentencia traslade a **COLPENSIONES** los siguientes conceptos: (i) El capital ahorrado en la cuenta individual de la señora **CLAUDIA IVON LOPEZ ECHAVARRIA**, (ii) los rendimientos generados, (iii) los gastos de administración cobrados, sin lugar a descontar valores por concepto de prima de reaseguros de Fogafín, y las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes, dineros que deberán ser indexados al momento de su

traslado y asumidos con cargo a su propio patrimonio; y (iv) el aporte correspondiente al fondo de la garantía de pensión mínima.

Al momento de cumplir con la orden de traslado, los conceptos deberán aparecer discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen.

TERCERO: Sin costas en esta instancia.

La anterior decisión se notifica por **EDICTO**.

LOS MAGISTRADOS



CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA



HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ



GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ

Radicado 05001-31-05-020-2021-00149-01
Radicado Interno: P0432323
Asunto: Confirma y adiciona sentencia



SECRETARÍA SALA LABORAL

EDICTO VIRTUAL

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la sentencia que a continuación se relaciona:

Proceso	Ordinario
Demandante	Claudia Ivón López Echavarría
Demandado (s)	Colpensiones y Protección S.A.
Radicado	05001-31-05-020-2021-00149-01
Decisión	Confirma y adiciona sentencia
Magistrado ponente	Carmen Helena Castaño Cardona

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/148> por el término de un (01) día hábil. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Fijado el 31 de marzo de 2023 a las 8:00am

CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN

Se desfija el 31 de marzo de 2023 a las 5:00pm

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
SECRETARIO